

TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y LA REPÚBLICA ITALIANA SOBRE ASISTENCIA LEGAL RECÍPROCA EN MATERIA PENAL

La República Dominicana y la República Italiana, en adelante denominadas "Las Partes";

CONSIDERANDO los lazos de amistad y cooperación que les unen;

DESEOSOS de fortalecer las bases jurídicas de la asistencia legal recíproca en materia penal;

ACTUANDO en congruencia con sus respectivas constituciones y en apego a los principios universales de derecho internacional, en especial respeto a la soberanía nacional, igualdad entre los Estados y la no intervención en los asuntos internos de cada Parte;

TOMANDO EN CUENTA los principios contenidos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y deseosos de cooperar bilateralmente para su promoción.

Han convenido lo siguiente:

**ARTÍCULO 1
OBLIGACIÓN DE CONCEDER ASISTENCIA LEGAL**

1. Las Partes deberán, de conformidad con el presente Tratado, concederse la asistencia legal recíproca en materia penal.
2. La asistencia podrá prestarse aun cuando el hecho por el cual se procede en la Parte Requirente no sea considerado como un delito por la ley de la Parte Requerida.
3. El presente Tratado tendrá por finalidad exclusivamente la asistencia legal entre las Partes. Sus disposiciones no generarán derecho alguno a favor de personas en la obtención o exclusión de pruebas o a la obstaculización en el cumplimiento de una solicitud de asistencia legal.
4. El presente Tratado no autoriza a las autoridades competentes de una de las Partes a ejercer, en el territorio de la otra Parte, facultades que sean exclusivamente de la competencia de las autoridades de la otra Parte.
5. El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud de asistencia legal presentada después de la entrada en vigor del mismo, inclusive si las respectivas omisiones o actos hayan tenido lugar antes de esa fecha.

**ARTÍCULO 2
ALCANCE DE LA ASISTENCIA LEGAL**

La asistencia legal comprenderá:

1. Notificación de documentos.
2. Obtención de pruebas, evidencias o elementos materiales probatorios.
3. Suministro de información relacionada con movimientos bancarios y financieros.
4. Localización e identificación de personas y objetos.
5. Citación a testigos, víctimas, personas investigadas o procesadas, y peritos para comparecer voluntariamente ante la autoridad competente en la Parte Requirente.
6. Traslado temporal de personas detenidas a efectos de comparecer en el proceso penal como testigos o víctimas, personas investigadas o procesadas en el territorio de la Parte Requirente o para otras actuaciones procesales indicadas en la solicitud.



7. Ejecución de medidas sobre bienes.
8. Entrega de documentos, objetos, y otras pruebas, evidencias o elementos materiales probatorios.
9. Autorización de la presencia, durante la ejecución de una solicitud, de representantes de las autoridades competentes de la Parte Requirente.
10. La realización y la transmisión de peritajes.
11. La recepción de testimonios, interrogatorios o de otras declaraciones.
12. La ejecución de inspecciones judiciales o el examen de lugares o de cosas.
13. La ejecución de investigaciones, registros, inmovilizaciones de bienes e incautaciones.
14. Interceptaciones de comunicaciones.
15. Cualquier otra forma de asistencia legal de conformidad con los fines y las disposiciones de este Tratado.

ARTÍCULO 3 AUTORIDADES CENTRALES

1. Para asegurar la debida cooperación entre las Partes en la prestación de la asistencia legal objeto de este Tratado, se designará como Autoridades Centrales de las Partes:
 - a) Por parte de la República Dominicana, la Autoridad Central es la Procuraduría General de la República, en el Despacho del Procurador General de la República por órgano de la Oficina de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones.
 - b) Por parte de la República Italiana, la Autoridad Central es el Ministerio de la Justicia.
2. Las Partes se notificarán mutuamente sin demora, por vía diplomática, sobre toda modificación de sus Autoridades Centrales y ámbitos de competencia.
3. Las Autoridades Centrales de las Partes transmitirán y recibirán directamente las solicitudes de asistencia legal a que se refiere este Tratado y las respuestas de éstas.
4. La Autoridad Central de la Parte Requerida cumplirá las solicitudes de asistencia legal en forma expedita o las transmitirá para su ejecución a la autoridad competente.
5. Cuando la Autoridad Central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad.

ARTÍCULO 4 LEY APLICABLE

1. Las solicitudes deberán ejecutarse de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Tratado, procedimientos que serán supletoriamente completados por las reglas de la legislación interna de la Parte Requerida.
2. Si alguna de las Partes requiere la aplicación de algún procedimiento específico en referencia al cumplimiento de una solicitud para asistencia legal mutua, deberá ser así expresado y la Parte Requerida podrá cumplir con la solicitud de conformidad con su legislación interna.



ARTÍCULO 5
FORMA Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD

1. La solicitud de asistencia legal se formulará por escrito.
2. La Parte Requerida podrá dar trámite a una solicitud recibida por telefax, fax, correo electrónico u otro medio de comunicación similar. La Parte Requirente transmitirá el original del documento a la brevedad posible.
3. La Parte Requerida informará a la Parte Requirente los resultados de la ejecución de la solicitud sólo bajo la condición de recibir el original de la misma.
4. La solicitud contendrá:
 - a) La autoridad competente que solicita la asistencia legal.
 - b) Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia legal solicitada.
 - c) Descripción de los hechos objeto de investigación o procedimiento penal, en especial las circunstancias de tiempo y lugar, su calificación jurídica, el texto de las disposiciones legales que tipifican la conducta como hecho punible y, cuando sea necesario, la cuantía del daño causado.
 - d) Fundamentación y descripción de cualquier procedimiento especial que la Parte Requirente desee que se practique al ejecutar la solicitud.
 - e) Identificación de personas sujetas a investigación o proceso judicial, investigados, procesados, testigos o peritos.
 - f) Plazo dentro del cual la Parte Requirente desea que la solicitud sea cumplida.
 - g) Información sobre el nombre completo, el domicilio y en lo posible, el número de teléfono de las personas a ser notificadas y su relación con la investigación o proceso judicial en curso.
 - h) Indicación y descripción del lugar a inspeccionar, así como de los objetos por asegurar.
 - i) El objeto, y de ser necesario a la Parte Requirente, las preguntas a ser formuladas a la persona cuya audición se requiere.
 - j) En caso de solicitarse asistencia de representantes de las autoridades competentes de la Parte Requirente para la ejecución de la solicitud, indicación de los nombres completos, cargo y motivo de su presencia.
 - k) Cualquier petición para observar la confidencialidad del hecho de la recepción de la solicitud de asistencia legal, su contenido y/o cualquier actuación emprendida conforme a la misma.
 - l) Cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la Parte Requerida para el cumplimiento de la solicitud.
5. Si la Parte Requerida considera que la información contenida en la solicitud no es suficiente para dar trámite a la misma, podrá solicitar información adicional.



9

ARTÍCULO 6 IDIOMAS

Toda solicitud de asistencia legal, los documentos adjuntos y la información adicional, con fundamento en este Tratado, deberá acompañarse de la respectiva traducción al idioma de la Parte Requerida.

ARTÍCULO 7 DENEGACIÓN O APLAZAMIENTO DE ASISTENCIA LEGAL

1. La asistencia legal podrá ser denegada total o parcialmente cuando:
 - a) El cumplimiento de la solicitud pueda causar daño a la soberanía, seguridad, al orden público u otros intereses esenciales de la Parte Requerida.
 - b) El cumplimiento de la solicitud sea contrario a principios fundamentales del sistema jurídico o a la legislación de la Parte Requerida, o no se ajuste a las disposiciones de este Tratado.
 - c) La solicitud se refiera a acciones por las cuales la persona incoada en la Parte Requirente ya fue condenada o absuelta mediante sentencia en firme por los mismos hechos en la Parte Requerida o la acción haya prescrito para la Parte Requirente.
 - d) La solicitud se refiera a delitos militares que no estén contemplados en la legislación penal común.
 - e) Existan motivos fundados por la Parte Requerida para creer que la solicitud se ha formulado con miras a procesar a una persona por razón de raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, pertenencia a grupo social determinado, u opiniones políticas.
 - f) La solicitud se refiere a un delito de naturaleza política o a un delito conexo con un delito político. Para tal fin, no se considerarán como delitos políticos:
 - i) El homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia.
 - ii) Los delitos de terrorismo y cualquier otro que sea considerado como delito al tenor de cualquier tratado, convenio o acuerdo internacional del cual ambos Estados sean parte.
2. El secreto bancario o tributario no puede ser usado como base para negar la asistencia legal.
3. La Parte Requerida podrá diferir o denegar el cumplimiento de la solicitud cuando considere que su ejecución puede perjudicar u obstaculizar una investigación o procedimiento judicial en curso en su territorio.
4. Antes de rehusar o posponer la ejecución de una solicitud de asistencia, la Parte Requerida analizará la posibilidad de que la asistencia legal se conceda bajo condiciones que considere necesarias. Si la Parte Requirente acepta la asistencia bajo estas condiciones, estará obligada a cumplirlas.
5. Si la Parte Requerida decide denegar o diferir la asistencia legal, informará a la Parte Requirente por intermedio de su Autoridad Central, expresando los motivos de tal decisión.



ARTÍCULO 8
VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS

1. Todos los documentos, registros, declaraciones y cualquier otro material transmitido de acuerdo a lo estipulado en este Tratado, estarán exentos de cualquier legalización o apostilla, autenticación o cualquier otro requisito de forma.
2. Los documentos, registros, declaraciones y cualquier otro material transmitido por la Autoridad Central de la Parte Requerida, deberá ser admitido como evidencia sin la necesidad de otra justificación o pruebas de autenticidad.

ARTÍCULO 9
CONFIDENCIALIDAD Y LIMITACIONES EN EL EMPLEO DE LA INFORMACIÓN

1. A petición de la Autoridad Central de la Parte Requirente, la Parte Requerida, de conformidad con su ordenamiento jurídico, asegurará la confidencialidad del hecho de la recepción de la solicitud de asistencia legal, su contenido y cualquier actuación emprendida conforme a la misma, salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar la solicitud.
2. Si para la ejecución de la solicitud fuere necesario el levantamiento de la reserva, la Parte Requerida pedirá aprobación a la Parte Requirente, mediante comunicación escrita. Sin dicha autorización, la solicitud no se ejecutará.
3. La Parte Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida mediante este Tratado para fines distintos a los declarados en la solicitud de asistencia legal, sin previa autorización de la Parte Requerida.
4. En casos particulares, si la Parte Requirente necesitare divulgar y utilizar, total o parcialmente, la información o pruebas para propósitos diferentes a los especificados, solicitará la autorización correspondiente a la Parte Requerida, la que podrá acceder o denegar, total o parcialmente lo solicitado.

ARTÍCULO 10
EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA LEGAL

1. El cumplimiento de las solicitudes de asistencias se realizará conforme las estipulaciones del presente Tratado, teniendo en cuenta supletoriamente, la legislación de la Parte Requerida.
2. A petición de la Parte Requirente, la Parte Requerida prestará la asistencia legal de acuerdo con las formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud, siempre y cuando no sea contrario a principios fundamentales del sistema jurídico o a la legislación de la Parte Requerida, o no se ajuste a las disposiciones de este Tratado.
3. Si la Parte Requirente ha solicitado la presencia de representantes de sus autoridades competentes en la ejecución de la solicitud, la Parte Requerida le informará su decisión. En caso de que sea positiva, se le informará con antelación a la Parte Requirente la fecha y el lugar de la ejecución de la solicitud de asistencia.
4. La Autoridad Central de la Parte Requerida remitirá y tramitará oportunamente la información y las pruebas obtenidas como resultado de la ejecución de la solicitud a la Autoridad Central de la Parte Requirente.
5. Cuando no sea posible cumplir con la solicitud, en todo o en parte, la Autoridad Central de la Parte Requerida lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central de la Parte Requirente e informará las razones que impidan su cumplimiento.



ARTÍCULO 11
RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS FÍSICAS Y ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS
EN EL ESTADO REQUERIDO

1. La Parte Requerida recibirá en su territorio, entre otros, testimonios, declaraciones de víctimas y de personas investigadas o procesadas, peritajes, documentos, objetos y demás pruebas señaladas en la solicitud, de acuerdo con su legislación y los transmitirá a la Parte Requirente.
2. A solicitud especial de la Parte Requirente, la Parte Requerida señalará la fecha y lugar de cumplimiento de la solicitud de asistencia.
3. A los representantes de las Autoridades Competentes de la Parte Requirente presentes en la ejecución de la solicitud, se les permitirá formular preguntas directas a la persona que se escucha o interpela, bajo la coordinación del representante de la autoridad competente de la Parte Requerida.
4. La Parte Requirente cumplirá toda condición acordada con la Parte Requerida relativa a los documentos y objetos que le entregue, incluyendo la protección de derechos de terceros sobre tales documentos y objetos.
5. A petición de la Parte Requerida, la Parte Requirente devolverá a la brevedad posible los originales de los documentos y objetos que le hayan sido entregados, de acuerdo con el numeral 1 del presente artículo. La entrega y devolución de los objetos en el marco de la asistencia legal, se realizará libre de impuestos.
6. La persona citada a declarar tendrá la facultad de negarse a prestar declaraciones cuando la legislación de la Parte Requerida o de la Parte Requirente lo permita; para tal efecto, la Parte Requirente deberá hacer mención expresa de ello en la solicitud de asistencia.
7. La Parte Requerida admitirá la presencia del defensor de la persona citada a declarar, cuando ello sea previsto por la legislación de cualquiera de las Partes.

ARTÍCULO 12
AUDIENCIA POR VIDEOCONFERENCIA

1. La audición de testigos, investigados o procesados, peritos o víctimas que se encuentren en el territorio de la Parte Requerida y que deban comparecer ante la Parte Requirente, se tramitará, preferiblemente, por medio de videoconferencia.
2. La persona citada a declarar tendrá derecho a la asistencia de un defensor, con el que podrá comunicarse de manera reservada, así como de un intérprete, en caso de ser necesario o requerido.
3. La Parte Requerida consentirá la audiencia por videoconferencia y, si no dispone de los medios técnicos que permitan una videoconferencia, la Parte Requirente podrá ponerlos a su disposición.
4. Las reglas siguientes se aplicarán a la audiencia por videoconferencia:
 - a) La audiencia será realizada en presencia de la autoridad competente de ambas Partes y de ser necesario con la asistencia de un intérprete. La Parte Requerida es responsable de la identificación de la persona a la que se toma declaración y del respeto de los principios fundamentales previstos en la legislación interna de la Parte Requerida. En el caso de que la autoridad de la Parte Requerida estimara que no se respetan los principios fundamentales de su derecho durante la audiencia, adoptará inmediatamente las medidas necesarias para velar porque dicha audiencia prosiga conforme a dichos principios.



- b) Las autoridades competentes de las Partes convendrán, de ser necesario, las medidas relativas a la protección de la persona que comparezca.
 - c) La audiencia se efectuará directamente por la Parte Requirente o bajo su dirección, de conformidad con su legislación interna.
 - d) Al término de la audiencia, la autoridad competente de la Parte Requerida levantará un acta, indicando la fecha, hora y lugar de la misma, la identidad de la persona que compareció, su contenido, así como las identidades y calidades de las demás personas que hayan participado en la audiencia. Este documento será transmitido a la Parte Requirente.
5. La Parte Requerida podrá permitir el empleo de tecnología de conexión en videoconferencia para cualquier otra finalidad prevista en el Presente Tratado.

ARTÍCULO 13
TRANSMISIÓN ESPONTÁNEA DE MEDIOS DE PRUEBA Y DE INFORMACIÓN

1. Por conducto de las Autoridades Centrales y dentro de los límites de su legislación interna, las autoridades competentes de cada Parte podrán, sin que hubiera sido presentada una solicitud de asistencia jurídica en ese sentido, intercambiar información y medios de prueba con respecto a hechos penales sancionables cuando estimen que esta transmisión es de naturaleza tal que permitiría a la otra Parte:
- a) Presentar una solicitud de asistencia jurídica conforme al presente Tratado.
 - b) Iniciar procedimientos penales.
 - c) Facilitar el desarrollo de una investigación penal en curso.
2. La Parte que proporcione la información podrá, de conformidad con su legislación interna, sujetar su utilización por la Parte destinataria a determinadas condiciones. La Parte destinataria estará obligada a respetar esas condiciones.

ARTÍCULO 14
LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y OBJETOS

Las autoridades competentes de la Parte Requerida adoptarán todas las medidas contempladas en su legislación para la localización e identificación de personas y objetos indicados en la solicitud de asistencia.

ARTÍCULO 15
COMPARECENCIA DE TESTIGOS, VÍCTIMAS, PERITOS Y PERSONAS INVESTIGADAS O PROCESADAS EN EL TERRITORIO DE LA PARTE REQUIRENTE

1. Cuando la Parte Requirente solicite la comparecencia de una persona para rendir testimonio, peritaje u otras actuaciones procesales en su territorio, la Parte Requerida informará a esta persona sobre la invitación de la Parte Requirente a comparecer ante sus autoridades competentes.
2. La solicitud de comparecencia de la persona deberá contener información sobre las condiciones y la forma de pago de todos los gastos relacionados con la comparecencia de la persona citada, así como la relación de las garantías de que ésta gozará conforme al artículo 16 del presente Tratado.
3. La solicitud de comparecencia de la persona no deberá contener amenaza de que se le aplicarán medidas de aseguramiento o sanción a causa de su no comparecencia en el territorio de la Parte Requirente.



4. La persona citada expresará su deseo de comparecer o no. La Autoridad Central de la Parte Requerida informará sin demora a la Autoridad Central de la Parte Requirente sobre la respuesta dada y, si la persona acepta comparecer, deberá facilitarle el contacto con la Parte Requirente a fin de que esta le avance los recursos que precise para cubrir los gastos.
5. La Parte Requirente transmitirá a la Parte Requerida la solicitud de notificación de la citación a comparecer ante la Autoridad del territorio de la Parte Requirente al menos con sesenta (60) días de antelación al día previsto para la comparecencia. Sin embargo, en casos excepcionales en que la notificación pueda resultar oportuna aun en un plazo menor, la Parte Requerida hará todo lo posible para satisfacer la asistencia.

ARTÍCULO 16 GARANTÍAS A LA PERSONA CITADA

1. Ninguna persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que como consecuencia de una citación compareciera ante las autoridades competentes de la Parte Requirente, podrá ser perseguida penalmente, detenida o sometida a restricción de su libertad individual en el territorio de dicha Parte por hecho o condenas anteriores a su ingreso al territorio de la Parte Requirente. Si por algún motivo no se puede proporcionar esta garantía, la Autoridad Central de la Parte Requirente lo señalará en la solicitud con el fin de informar a la persona citada y permitirle tomar la decisión sobre su comparecencia teniendo en cuenta estas circunstancias.
2. La garantía establecida en el numeral 1 del presente artículo cesará cuando la persona citada hubiere tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte Requirente durante un plazo ininterrumpido de treinta (30) días contados a partir del día en que se le entregue la notificación escrita de que su presencia ya no es requerida por las autoridades competentes y, no obstante, permanece en dicho territorio o regresa a él después de abandonarlo.
3. La persona citada no puede ser obligada a rendir testimonio en un proceso diferente al especificado en la solicitud.

ARTÍCULO 17 TRASLADO PROVISIONAL DE PERSONAS DETENIDAS

1. En caso de no resultar factible la audición por videoconferencia, la Parte Requerida podrá consentir el traslado de toda persona detenida para testificar o deponer en calidad de víctima, o para otras actuaciones procesales indicadas en la solicitud, a condición de devolver al detenido a la Parte Requerida en el plazo indicado por ésta.
2. El plazo inicial para el traslado de la persona no podrá ser superior a noventa (90) días. El tiempo de estadía de la persona trasladada podrá ser ampliado por la Autoridad Central de la Parte Requerida a solicitud de la Autoridad Central de la Parte Requirente.
3. La forma y condiciones de traslado y el retorno de la persona se acordará entre las Autoridades Centrales de las Partes.
4. Se denegará el traslado:
 - a) Si la persona detenida no consiente en ello por escrito.
 - b) Si su presencia es necesaria en un proceso judicial en curso en el territorio de la Parte Requerida.
5. La Parte Requirente custodiará a la persona trasladada mientras se mantenga vigente la medida de detención ordenada por la autoridad competente de la Parte Requerida. En caso de ser liberada por decisión de la Parte Requerida, la Parte Requirente aplicará los artículos 16 y 21 del presente Tratado.



6. El tiempo de estadía de la persona trasladada, fuera del territorio de la Parte Requerida se computará para efectos del tiempo total que permanezca recluida (incluyendo el plazo del cumplimiento de la condena).
7. La persona detenida que no otorgue su consentimiento para comparecer ante la Parte Requerente, no podrá ser sometida a ninguna medida de apremio o sanción por este hecho.

ARTÍCULO 18
PROTECCIÓN DE PERSONAS CITADAS O TRASLADADAS A
TERRITORIO DE LA PARTE REQUERENTE

Cuando sea necesario, la Parte Requerente asegurará la protección de las personas citadas o trasladadas a su territorio, de conformidad con los artículos 15, 16 y 17 del presente Tratado.

ARTÍCULO 19
CASOS ESPECIALES DE ASISTENCIA LEGAL

La Parte Requerida, de conformidad con su legislación interna, proveerá de extractos de expedientes penales y/o documentos u objetos que sean necesarios en una investigación y/o procedimiento judicial abierto en el territorio de la Parte Requerente, cuando ésta se lo solicite.

ARTÍCULO 20
MEDIDAS SOBRE BIENES

1. Las Partes cooperarán en los ámbitos de localización de bienes, instrumentos o productos directos e indirectos del delito, y aplicarán las medidas adecuadas con respecto a ellos, de acuerdo a su legislación interna. Lo anterior incluso, en materia de extinción del derecho de dominio sobre bienes para la República Dominicana, o medidas patrimoniales de prevención para la República Italiana.
2. Tal cooperación se basará en las disposiciones del presente Tratado, así como en las disposiciones correspondientes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del 15 de noviembre de 2000, en particular en sus artículos 2, 12, 13 y 14, y se extenderá no sólo a los delitos previstos en esta Convención sino a cualquier otro hecho delictivo, observando el punto 2 del Artículo 1 del Presente Tratado.
3. Las Partes podrán, de acuerdo con su legislación interna, repartir los bienes o activos decomisados. Para lo anterior, las Partes celebrarán, para cada caso los acuerdos o arreglos específicos en los que se determine, entre otras circunstancias, los bienes a ser compartidos, la cuantía o porción de los mismos que le corresponderá a cada Parte, y las condiciones particulares pertinentes.

ARTÍCULO 21
GASTOS

1. Sin perjuicio de un acuerdo sobre el particular entre las Partes, la Parte Requerida asumirá los gastos ordinarios de la ejecución de solicitudes de asistencia legal, salvo los siguientes gastos que asumirá la Parte Requerente:
 - a) Gastos relativos al transporte de las personas a su territorio y de regreso, conforme a los artículos 15 y 17 del presente Tratado, y a su estadía en este territorio, así como otros pagos que correspondan a estas personas.
 - b) Gastos y honorarios de peritos.



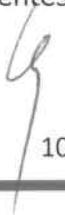
- c) Gastos relativos a transporte, estadía y presencia de los representantes de autoridades competentes de la Parte Requirente durante la ejecución de la solicitud, de conformidad con el numeral 3 del Artículo 10 del presente Tratado.
 - d) Gastos relativos al envío y devolución de objetos trasladados del territorio de la Parte Requerida al territorio de la Parte Requirente.
 - e) Los gastos relativos a la protección de personas estipulados en el Artículo 18 del presente Tratado.
2. En caso de que la solicitud requiera de gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, como es el caso de los equipos de investigación conjunta y las entregas controladas, las Autoridades Centrales de las Partes se consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera como se sufragarán los gastos.

ARTÍCULO 22
MECANISMOS PARA FACILITAR LA COOPERACIÓN JURÍDICA EN
MATERIA PENAL

1. Las Partes cooperarán adicionalmente a través de las modalidades siguientes:
- a) Intercambio de experiencias en materia de investigación criminal, terrorismo, corrupción, tráfico de personas, estupefacientes e insumos químicos, lavado de dinero, criminalidad organizada y delitos conexos, entre otros.
 - b) Intercambio de información sobre modificaciones introducidas a sus sistemas judiciales y nuevos criterios jurisprudenciales en las materias que abarcan el presente instrumento.
 - c) Capacitación y actualización de funcionarios encargados de la investigación y procesamientos penales.
2. Para la realización de las actividades y encuentros previstos en el presente Tratado, las Autoridades Centrales acordarán directamente la metodología que se utilizará en cada uno de ellos, así como su duración y número de participantes.
3. Las Partes financiarán la cooperación a que se refiere el presente artículo, de conformidad con su disponibilidad, afectación y lo establecido en su respectiva legislación interna.

ARTÍCULO 23
EQUIPOS INVESTIGATIVOS COMUNES

1. Las autoridades competentes podrán, de común acuerdo, constituir equipos investigativos conjuntos para un objetivo determinado y por una duración limitada, que podrá ser prorrogada por mutuo acuerdo, para desarrollar investigaciones penales en el territorio de una Parte, o de las dos Partes.
2. Un equipo investigativo común podrá constituirse especialmente cuando:
- a) Las investigaciones adelantadas por una de las Partes por delitos que impliquen pesquisas difíciles y de notable complejidad, conciernan a la otra Parte.
 - b) Ambas partes adelanten investigaciones por delitos que, a causa de las circunstancias del caso, exijan una acción coordinada y concertada.
3. Los componentes del equipo investigativo en común, procedentes de la parte en cuyo territorio el equipo actúa son denominados "miembros", mientras que los componentes procedentes de la otra Parte son denominados "miembros destacados".



4. La composición del equipo será indicada en el acuerdo constitutivo y podrá comprender, además de los representantes de las autoridades competentes, agentes de policía judicial, peritos, médicos forenses, y otros miembros auxiliares de la justicia. Además, es posible, decidir cuáles personas diferentes a los representantes de las autoridades competentes de las dos partes, pertenecientes a organismos internacionales de investigación y/o policía, participen a las actividades del equipo de investigación en común. Los derechos conferidos a los miembros o a los miembros destacados del equipo en virtud del presente artículo, no se aplican a tales personas, a menos que el acuerdo no establezca lo contrario de manera clara.
5. La petición de constitución de un equipo de investigación común contendrá una propuesta de la composición del equipo y las modalidades de desarrollo de las actividades de investigación, así como las indicaciones establecidas en el Artículo 5 del presente Tratado, donde se puedan aplicar.
6. El equipo de investigación común operará en el territorio de las Partes según los acuerdos estipulados entre las respectivas autoridades competentes teniendo en cuenta las siguientes condiciones generales:
 - a) El equipo ejercerá su propia actividad respetando el derecho de la Parte en cuyo territorio actúa.
 - b) La autoridad pertinente de la Parte en cuyo territorio el equipo interviene asegurará y establecerá las condiciones necesarias a la ejecución de las actividades acordadas, designando de la misma manera, entre los componentes del equipo, el responsable de la dirección del mismo.
 - c) El responsable del equipo actuará dentro de los límites de su competencia, de conformidad al derecho nacional y coordinará las actividades respetando las reglas establecidas por las autoridades competentes en el acuerdo de constitución del equipo.
 - d) Los miembros destacados del equipo de investigación común:
 - (i) Antes de comenzar las investigaciones, deberán estar autorizados por la autoridad central de la Parte en cuyo territorio el equipo actúe, a entrar y permanecer por el tiempo determinado en el territorio de dicha parte.
 - (ii) Tendrán permiso de estar presentes en el territorio de la Parte en cuyo territorio el equipo interviene cuando sean adoptadas medidas de investigación.
 - (iii) Podrán de conformidad a la legislación de la Parte Requerida, ejecutar las medidas específicas de investigación asignadas por el responsable del equipo, donde lo prevea el acuerdo constitutivo o previa autorización de las autoridades competentes de las Partes.
 - (iv) Podrán de conformidad con el propio derecho nacional y en el límite de sus competencias, proporcionar al equipo las informaciones disponibles en la Parte que los ha destacado, a los efectos de las investigaciones realizadas por el equipo mismo.
 - (v) Podrán solicitar la adopción de medidas eventualmente consideradas necesarias por el responsable del equipo directamente a sus autoridades competentes, que la van a manejar según las condiciones requeridas a una investigación hecha a nivel nacional.
7. Si el equipo de investigación común necesita asistencia por parte de un tercer país, las autoridades competentes de la Parte en cuyo territorio el equipo interviene puede



solicitarla a las autoridades competentes del país interesado de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales aplicables, o si éstos faltaren, el de la cortesía internacional.

8. Las informaciones adquiridas legalmente por un miembro o por un miembro destacado durante su participación a un equipo de investigación común, que las autoridades pertinentes de las Partes interesadas no podrían de otra manera adquirir, pueden ser utilizadas, además que para las finalidades previstas por el acto de constitución del equipo:
 - a) Para la persecución de otros delitos, previa autorización de la Parte en cuyo territorio ha sido adquirida la información. Dicha autorización puede ser denegada, solamente cuando el uso de ella compromete las investigaciones penales de la Parte mencionada o cuando ésta pueda negar la asistencia legal.
 - b) Para conjurar una amenaza inminente y grave contra la seguridad pública, sin perjuicio de las disposiciones del literal anterior.
9. Las actas y documentos obtenidos en desarrollo de este artículo, se asimilarán a los obtenidos por la Parte Requerente en ejecución de una solicitud de asistencia tramitada dentro del marco del presente Tratado.
10. Para los efectos del presente artículo, se entenderá como autoridad competente las siguientes:
 - a) Para la República Dominicana: las autoridades del Sistema de Administración de Justicia competentes.
 - b) Para la República Italiana: la Autoridad Judicial procedente.
11. Las Autoridades Competentes deberán adelantar todas las solicitudes de equipos de investigación por conducto de las Autoridades Centrales indicadas en el Artículo 3 del presente Tratado.

ARTÍCULO 24 ENTREGAS VIGILADAS O CONTROLADAS

1. Cada una de las Partes podrá realizar entregas controladas o vigiladas hacia el territorio de la otra Parte encaminadas a obtener elementos necesarios para la prueba de delitos o para identificar, individualizar y capturar a los responsables.
2. La decisión de efectuar entregas controladas o vigiladas será adoptada en cada caso específico por las autoridades competentes de la Parte Requerida, dentro del respeto al derecho nacional de tal Parte.
3. Las entregas controladas o vigiladas se efectuarán según los procedimientos vigentes en la Parte Requerida y de conformidad con lo contemplado en el presente Tratado, las convenciones y tratados bilaterales o multilaterales vigentes entre las Partes. Las autoridades competentes de la Parte Requerida mantendrán el derecho de iniciativa, dirección y control de la operación.
4. En cuanto a los gastos, se aplicarán las disposiciones previstas en el Artículo 21.
5. Para los efectos del presente artículo, se entenderá como autoridad competente las siguientes:
 - a) Para la República Dominicana: el Director General de Persecución del Ministerio Público.



b) Para la República Italiana: la Autoridad Judicial precedente.

6. Las autoridades competentes deberán adelantar todas las solicitudes de entrega controlada o vigilada por conducto de las Autoridades Centrales indicadas en el Artículo 3 del presente Tratado.

ARTÍCULO 25 OTROS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN

El presente Tratado no impedirá a las Partes prestarse otras formas de cooperación o asistencia jurídica en virtud de acuerdos específicos, de entendimientos o de prácticas compartidas, acordes con sus respectivas legislaciones internas y con los tratados internacionales que le sean aplicables.

ARTÍCULO 26 CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. Las Autoridades Centrales de las Partes, a propuesta de una de ellas, celebrarán consultas sobre temas de interpretación o aplicación de este Tratado en general o sobre una solicitud en concreto.
2. Cualquier controversia que surja en la interpretación o aplicación de este Tratado será resuelta por negociaciones diplomáticas directas.

ARTÍCULO 27 DISPOSICIONES FINALES

1. El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las Partes y las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 2 de este Artículo.
2. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción de la última notificación recibida, a través de la vía diplomática, por la cual las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos legales internos necesarios para su entrada en vigor.
3. El presente Tratado se dará por terminado ciento ochenta (180) días después de que una de las Partes reciba por la vía diplomática la notificación escrita de la otra Parte sobre su intención en tal sentido.
4. La terminación del presente Tratado no afectará la conclusión de las solicitudes de asistencia legal que se hayan recibido durante su vigencia.

Suscrito en Roma, Italia, el trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), en dos ejemplares en idioma español e italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

**POR EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

Miguel Vargas
Ministro de Relaciones Exteriores



**POR EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ITALIANA**

Alfonso Bonafede
Ministro de Justicia



**TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI
ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana, d'ora in avanti denominate "le Parti";

CONSIDERANDO i legami di amicizia e cooperazione che le uniscono;

DESIDEROSE di rafforzare le basi giuridiche dell'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale;

AGENDO in coerenza con le loro rispettive costituzioni e in adesione ai principi universali di diritto internazionale, nel particolare rispetto della sovranità nazionale, dell'uguaglianza tra gli Stati e della non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte;

TENENDO CONTO dei principi enunciati negli strumenti internazionali in materia di diritti umani e desiderosi di cooperare bilateralmente per la loro promozione;

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1
OBBLIGO DI CONCEDERE ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

1. Le Parti devono, in conformità al presente Trattato, concedersi l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.
2. L'assistenza può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede nella Parte Richiedente non è considerato reato dalla legge della Parte Richiesta.
3. Il presente Trattato ha come fine esclusivamente l'assistenza giudiziaria tra le Parti. Le sue disposizioni non determinano, in alcun caso, il diritto di singole persone ad acquisire, ad escludere prove o ad ostacolarne l'acquisizione nell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria.
4. Il presente Trattato non autorizza le autorità competenti di una delle Parti a esercitare, nel territorio dell'altra Parte, facoltà che sono esclusivamente di competenza delle autorità dell'altra Parte.
5. Il presente Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se concernenti azioni od omissioni commesse prima di tale data.

**ARTICOLO 2
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

L'assistenza giudiziaria comprende:

1. la notifica di documenti;
2. l'acquisizione di prove o elementi materiali di prova;
3. la trasmissione di informazioni relative a movimenti bancari e finanziari;
4. l'individuazione e identificazione di persone e oggetti;
5. la citazione di testimoni, vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali, periti, per la comparizione volontaria dinanzi all'autorità competente nella Parte Richiedente;



6. il trasferimento temporaneo nel territorio della Parte Richiedente delle persone detenute ai fini della comparizione nel processo penale in qualità di testimoni o vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali o per altri atti processuali indicati nella richiesta;
7. l'esecuzione di misure sui beni;
8. la consegna di documenti, oggetti e altre prove o elementi materiali di prova;
9. l'autorizzazione alla presenza, durante l'esecuzione di una richiesta, di rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente;
10. l'espletamento e trasmissione di perizie;
11. l'assunzione di testimonianze, interrogatori o altre dichiarazioni;
12. l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;
13. l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
14. le intercettazioni di comunicazioni;
15. qualsiasi altra forma di assistenza giudiziaria in conformità alle finalità e alle disposizioni del presente Trattato.

ARTICOLO 3 AUTORITA' CENTRALI

1. Per assicurare la debita cooperazione tra le Parti nella prestazione dell'assistenza giudiziaria oggetto del presente Trattato, si designano le seguenti Autorità Centrali:
 - a) per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia;
 - b) per la Repubblica Dominicana l'Autorità Centrale è la *Procuraduría General de la República*, presso il *Despacho del Procurador General de la República*, in qualità di organo della *Oficina de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones*.
2. Le Parti si notificano reciprocamente, senza indugio, per via diplomatica, ogni cambiamento delle proprie Autorità Centrali e degli ambiti di competenza.
3. Le Autorità Centrali delle Parti trasmettono e ricevono direttamente le richieste di assistenza giudiziaria a cui si riferisce il presente Trattato e le relative risposte.
4. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta dà sollecita esecuzione alle richieste di assistenza giudiziaria o le trasmette alle autorità competenti per la loro esecuzione.
5. Qualora l'Autorità Centrale trasmetta la richiesta a un'autorità competente per la sua esecuzione, raccomanda la rapida e adeguata esecuzione della richiesta da parte di detta autorità.

ARTICOLO 4 LEGGE APPLICABILE

1. Le richieste devono essere eseguite in conformità alle procedure stabilite nel presente Trattato, procedure che sono integrate in via suppletiva dalle norme della legislazione interna della Parte Richiesta.
2. Ciascuna Parte deve specificare se richiede l'applicazione di una specifica procedura in riferimento all'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria e la Parte



Richiesta può ottemperare alla richiesta in conformità alla propria legislazione interna.

ARTICOLO 5 FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA

1. La richiesta di assistenza giudiziaria deve essere presentata per iscritto.
2. La Parte Richiesta può dare seguito a una richiesta ricevuta per telefax, fax, posta elettronica o analogo mezzo di comunicazione. La Parte Richiedente trasmette l'originale del documento non appena possibile.
3. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente degli esiti della richiesta solo a condizione di ricevere l'originale della stessa.
4. La richiesta deve contenere:
 - a) l'autorità competente che richiede l'assistenza giudiziaria;
 - b) la finalità della richiesta e la descrizione dell'assistenza giudiziaria richiesta;
 - c) la descrizione dei fatti oggetto di indagine o del processo penale, e in particolare: le circostanze di tempo e di luogo, la loro qualificazione giuridica, il testo delle disposizioni di legge che contemplano la condotta come fatto punibile e, ove necessario, l'entità del danno cagionato;
 - d) i presupposti e la descrizione di qualsiasi specifica procedura che la Parte Richiedente chiede che venga applicata nell'esecuzione della richiesta;
 - e) l'identificazione delle persone sottoposte a indagine o a processo penale, dei testimoni o dei periti;
 - f) il termine entro il quale la Parte Richiedente chiede l'esecuzione della richiesta;
 - g) le informazioni sul nome completo, il domicilio e, per quanto possibile, il numero di telefono delle persone che devono ricevere le notifiche, con la specificazione della loro posizione nell'indagine o nel processo penale in corso;
 - h) l'indicazione e la descrizione del luogo da ispezionare, nonché degli oggetti da sequestrare;
 - i) l'oggetto e, ove necessario per la Parte Richiedente, le domande da rivolgere alla persona di cui si richiede l'audizione;
 - j) qualora si richieda la presenza di rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente per l'esecuzione della richiesta, l'indicazione dei nomi completi, della qualifica e del motivo della loro presenza;
 - k) l'eventuale richiesta di mantenere la riservatezza sulla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, sul suo contenuto e/o sulle attività eventualmente intraprese in esecuzione della stessa;
 - l) qualsiasi informazione ulteriore che possa essere utile alla Parte Richiesta per l'esecuzione della richiesta.
5. Se la Parte Richiesta ritiene che le informazioni contenute nella richiesta non siano sufficienti per dare seguito alla stessa, può richiedere informazioni supplementari.



ARTICOLO 6 LINGUE

Qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le informazioni supplementari, previste dal presente Trattato, devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

ARTICOLO 7 RIFIUTO O DIFFERIMENTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata totalmente o parzialmente quando:
 - a) l'esecuzione della richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte Richiesta;
 - b) l'esecuzione della richiesta è contraria a principi fondamentali del sistema giuridico o alla legislazione della Parte Richiesta o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;
 - c) la richiesta si riferisce ai medesimi fatti per i quali la persona nei confronti della quale si procede nella Parte Richiedente è già stata condannata o assolta con sentenza definitiva nella Parte Richiesta o il reato è prescritto per la Parte Richiedente;
 - d) la richiesta si riferisce a reati militari che non sono previsti nella legislazione penale comune;
 - e) la Parte Richiesta ha fondate ragioni per ritenere che la richiesta è stata avanzata al fine di processare una persona per motivi di razza, di sesso, di religione, di nazionalità, di origine etnica, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche;
 - f) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
 - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro della sua famiglia;
 - ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti.
2. Il segreto bancario o tributario non può essere utilizzato come motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria.
3. La Parte Richiesta può differire o rifiutare l'esecuzione della richiesta qualora ritenga che la sua esecuzione possa pregiudicare o ostacolare un'indagine o un procedimento giudiziario in corso nel suo territorio.
4. Prima di differire o rifiutare l'esecuzione di una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta valuta la possibilità che l'assistenza giudiziaria sia concessa alle condizioni che ritiene necessarie. Se la Parte Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è obbligata a soddisfarle.
5. Se la Parte Richiesta decide di differire o rifiutare l'assistenza giudiziaria, deve informarne la Parte Richiedente per il tramite della sua Autorità Centrale, indicando i motivi di tale decisione.



ARTICOLO 8 VALIDITA' DEI DOCUMENTI

1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso ai sensi del presente Trattato non richiedono legalizzazione, *apostille*, autenticazione né qualunque altro requisito di forma.
2. I documenti, i registri, le dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta devono essere ammessi come prova, senza che siano necessarie altre garanzie o prove di autenticità.

ARTICOLO 9 RISERVATEZZA E LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI

1. Su richiesta dell'Autorità Centrale della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformità al proprio ordinamento giuridico, assicura la riservatezza circa la ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, il suo contenuto e le eventuali attività intraprese sulla base della stessa, salvo che la rimozione del vincolo di riservatezza sia necessaria per l'esecuzione della richiesta.
2. Se per l'esecuzione della richiesta è necessaria la rimozione del vincolo di riservatezza, la Parte Richiesta chiede l'autorizzazione della Parte Richiedente, tramite comunicazione scritta. In assenza di tale autorizzazione non darà esecuzione alla richiesta.
3. La Parte Richiedente non utilizza alcuna delle informazioni o delle prove acquisite tramite il presente Trattato a fini diversi da quelli dichiarati nella richiesta di assistenza giudiziaria, senza previa autorizzazione della Parte Richiesta.
4. In casi particolari, se la Parte Richiedente ritiene necessario diffondere e utilizzare, totalmente o parzialmente, le informazioni o le prove a fini diversi da quelli specificati, richiede la relativa autorizzazione alla Parte Richiesta, la quale può concedere o rifiutare, totalmente o parzialmente, quanto richiesto.

ARTICOLO 10 ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

1. Le richieste di assistenza sono eseguite conformemente alle previsioni del presente Trattato, tenendo altresì conto, in via suppletiva, della legislazione della Parte Richiesta.
2. Su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta presta l'assistenza giudiziaria secondo le forme e le specifiche procedure indicate nella richiesta, a condizione che non sia contraria a principi fondamentali del sistema giuridico o alla legislazione della Parte Richiesta o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato.
3. Se la Parte Richiedente ha richiesto la presenza di rappresentanti delle proprie autorità competenti nell'esecuzione della richiesta, la Parte Richiesta le comunica la sua decisione. Qualora sia positiva, comunica in anticipo alla Parte Richiedente la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza.
4. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta trasmette le informazioni e le prove acquisite all'esito dell'esecuzione della richiesta all'Autorità Centrale della Parte Richiedente.
5. Qualora non sia possibile dare esecuzione alla richiesta, in tutto o in parte, l'Autorità Centrale della Parte Richiesta lo comunica immediatamente all'Autorità Centrale della Parte Richiedente e la informa delle ragioni dell'impedimento.



ARTICOLO 11
ASSUNZIONE DI PROVE ED ACQUISIZIONE DI ELEMENTI MATERIALI PROBATORI
NELLO STATO RICHIESTO

1. La Parte Richiesta acquisisce nel suo territorio, tra le altre prove, le testimonianze, le dichiarazioni delle vittime e delle persone sottoposte a indagini o a processi penali, le perizie, i documenti, gli oggetti e le altre prove indicate nella richiesta, secondo la propria legislazione, e le trasmette alla Parte Richiedente.
2. Su specifica domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta indica la data e il luogo di esecuzione della richiesta di assistenza.
3. Ai rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente presenti all'esecuzione della richiesta è permesso formulare domande dirette alla persona che è sentita o esaminata, con il coordinamento del rappresentante dell'autorità competente della Parte Richiesta.
4. La Parte Richiedente soddisfa le condizioni concordate con la Parte Richiesta relative ai documenti e agli oggetti consegnati, ivi comprese quelle finalizzate alla protezione dei diritti di terzi su tali documenti e oggetti.
5. Su richiesta della Parte Richiesta, la Parte Richiedente riconsegna non appena possibile gli originali dei documenti e gli oggetti che le sono stati consegnati, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La consegna e restituzione degli oggetti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale è esente da imposte.
6. La persona citata a rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o quella della Parte Richiedente lo consente; a tal fine, la Parte Richiedente deve fare espressa menzione di tale facoltà nella richiesta di assistenza.
7. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni laddove ciò sia previsto dalla legislazione di una delle Parti.

ARTICOLO 12
AUDIZIONE PER VIDEOCONFERENZA

1. L'audizione di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime che si trovano nel territorio della Parte Richiesta e che devono comparire dinanzi alle autorità della Parte Richiedente ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza.
2. Ove necessario o richiesto, la persona citata a rendere dichiarazioni ha diritto all'assistenza di un difensore, con il quale può comunicare riservatamente, nonché di un interprete.
3. La Parte Richiesta consente l'audizione per videoconferenza e, se non dispone degli strumenti tecnici che permettono una videoconferenza, la Parte Richiedente può metterli a sua disposizione.
4. All'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti regole:
 - a) l'audizione si svolge alla presenza dell'autorità competente di entrambe le Parti e, ove necessario, con l'assistenza di un interprete. La Parte Richiesta è responsabile della identificazione della persona sottoposta ad esame e del rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legislazione interna della Parte Richiesta. Qualora l'autorità della Parte Richiesta ritenga che non sono rispettati i principi fondamentali del proprio ordinamento durante l'audizione, adotta immediatamente le misure necessarie ad assicurare che tale audizione prosegua secondo tali principi;



- b) le autorità competenti delle Parti concordano, ove necessario, le misure relative alla protezione della persona che compare;
- c) l'audizione è condotta direttamente dalla Parte Richiedente o sotto la sua direzione, in conformità alla sua legislazione interna;
- d) al termine dell'audizione, l'autorità competente della Parte Richiesta redige un verbale, indicando la data, l'ora e il luogo della stessa, l'identità della persona che è comparsa, il contenuto dell'esame, l'identità e la qualifica delle altre persone che hanno partecipato all'audizione. Detto verbale è trasmesso alla Parte Richiedente.

5. La Parte Richiesta può consentire l'impiego del collegamento in videoconferenza per ogni altra finalità prevista dal presente Trattato.

ARTICOLO 13 TRASMISSIONE SPONTANEA DI MEZZI DI PROVA E DI INFORMAZIONI

1. Per il tramite delle Autorità Centrali ed entro i limiti previsti dalla propria legislazione interna, le autorità competenti di ciascuna Parte possono, senza che sia stata presentata una richiesta di assistenza giudiziaria in tal senso, scambiare informazioni e mezzi di prova rispetto a fatti penalmente rilevanti, ove ritengano che detta trasmissione sia tale da consentire all'altra Parte:

- a) di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato;
- b) di avviare procedimenti penali;
- c) di favorire lo sviluppo di una indagine penale in corso.

2. La Parte che fornisce le informazioni può, in conformità alla propria legislazione interna, vincolarne l'uso della Parte destinataria a determinate condizioni. La Parte destinataria è obbligata al rispetto di tali condizioni.

ARTICOLO 14 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI

Le autorità competenti della Parte Richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta di assistenza.

ARTICOLO 15 COMPARIZIONE DI TESTIMONI, VITTIME, PERITI E PERSONE SOTTOPOSTE A INDAGINI O A PROCESSI PENALI NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Qualora la Parte Richiedente domandi la comparizione di una persona per rendere testimonianza, per una perizia o per partecipare ad altri atti processuali nel suo territorio, la Parte Richiesta informa tale persona dell'invito della Parte Richiedente a comparire dinanzi alle sue autorità competenti.

2. La richiesta di comparizione della persona deve contenere le informazioni relative alle condizioni e alle modalità di pagamento delle spese relative alla comparizione della persona citata, nonché le informazioni relative alle garanzie di cui essa godrà ai sensi dell'articolo 16 del presente Trattato.

3. La richiesta di comparizione non deve prospettare l'applicazione di misure coercitive o di sanzioni in caso di mancata comparizione nel territorio della Parte Richiedente.



4. La persona citata dichiara se desidera o meno comparire. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta informa senza indugio l'Autorità Centrale della Parte Richiedente della scelta compiuta_e, se la persona accetta di comparire, deve favorire il suo contatto con la Parte Richiedente affinché questa le anticipi i fondi di cui ha bisogno per sostenere le spese.

5. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi alla Autorità del territorio della Parte Richiedente almeno con sessanta (60) giorni di anticipo rispetto al giorno previsto per la comparizione. Tuttavia, in casi eccezionali in cui la notifica può risultare opportuna anche in un termine inferiore, la Parte Richiesta fa tutto il possibile per soddisfare la richiesta.

ARTICOLO 16 GARANZIE DELLA PERSONA CITATA

1. Nessuna persona, qualunque sia la sua nazionalità, che a seguito di una citazione compare dinanzi alle autorità competenti della Parte Richiedente, può essere perseguita penalmente, arrestata o sottoposta a restrizione della sua libertà individuale nel territorio di tale Parte per fatti o condanne precedenti al suo ingresso nel territorio della Parte Richiedente. Se, per qualsiasi ragione, non è possibile fornire tale garanzia, l'Autorità Centrale della Parte Richiedente deve indicarlo nella domanda al fine di informare la persona citata e permetterle di adottare la decisione sulla sua comparizione tenendo conto di tali circostanze.

2. La garanzia prevista nel paragrafo 1 del presente articolo cessa quando la persona citata ha avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte Richiedente per un periodo ininterrotto di trenta (30) giorni, decorrente dal giorno in cui le è stata notificata la comunicazione scritta che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità competenti, e, tuttavia, permane in tale territorio o, avendolo lasciato, vi fa ritorno.

3. La persona citata non può essere obbligata a rendere testimonianza in un processo diverso da quello specificato nella richiesta.

ARTICOLO 17 TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI PERSONE DETENUTE

1. Nel caso in cui non possa avere luogo l'audizione per videoconferenza, la Parte Richiesta può consentire al trasferimento di ogni persona detenuta, per testimoniare o deporre in qualità di vittima, o per partecipare ad altri atti processuali indicati nella richiesta, a condizione che il detenuto sia riconsegnato alla Parte Richiesta nel termine da questa indicato.

2. Il termine di durata del trasferimento della persona non può essere superiore a novanta (90) giorni. Il periodo di permanenza della persona trasferita può essere prolungato dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta, su richiesta dell'Autorità Centrale della Parte Richiedente.

3. Le modalità e le condizioni del trasferimento e del ritorno della persona sono concordate tra le Autorità Centrali delle Parti.

4. Il trasferimento è rifiutato:

a) se la persona detenuta non vi consente per iscritto;

b) se la sua presenza è necessaria in un procedimento giudiziario in corso nel territorio della Parte Richiesta.

5. La Parte Richiedente tiene in custodia la persona trasferita fino a quando è in vigore la misura detentiva disposta dall'autorità competente della Parte Richiesta. Qualora la persona



sia liberata per decisione delle autorità competenti della Parte Richiesta, la Parte Richiedente si conformerà agli articoli 16 e 21 del presente Trattato.

6. Il periodo di permanenza della persona trasferita fuori dal territorio della Parte Richiesta è computato ai fini del periodo totale di detenzione.

7. La persona detenuta che non presta il proprio consenso a comparire dinanzi alla Parte Richiedente non potrà essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o sanzione per questo fatto.

ARTICOLO 18 PROTEZIONE DELLE PERSONE CITATE O TRASFERITE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

Qualora sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio, in conformità agli articoli 15, 16 e 17 del presente Trattato.

ARTICOLO 19 CASI SPECIALI DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

La Parte Richiesta, in conformità alla propria legislazione interna, fornisce estratti di fascicoli penali e/o documenti od oggetti che sono necessari per un'indagine e/o per un processo penale avviato nel territorio della Parte Richiedente, quando questa glielo richiede.

ARTICOLO 20 MISURE SU BENI

1. Le Parti cooperano per l'individuazione di beni, strumenti o proventi, diretti e indiretti, del reato, e applicano le misure adeguate rispetto ad essi, ai sensi della propria legislazione interna. Quanto sopra include le misure in materia di *extinción del derecho de dominio sobre bienes* per la Repubblica Dominicana o le misure patrimoniali di prevenzione per la Repubblica Italiana.

2. Tale cooperazione si basa sulle disposizioni del presente Trattato, nonché sulle disposizioni corrispondenti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 15 novembre 2000, in particolare sui suoi articoli 2, 12, 13 e 14, e si estende non solo ai reati previsti in tale Convenzione ma a qualsiasi altro fatto delittuoso, in osservanza del punto 2 dell'Articolo 1 del presente Trattato.

3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse concluderanno per ciascun caso gli accordi o le intese specifiche volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entità o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed eventuali condizioni particolari da applicare.

ARTICOLO 21 SPESE

1. Fatto salvo un accordo su casi specifici tra le Parti, la Parte Richiesta si fa carico delle spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, fatte salve le seguenti spese che sono a carico della Parte Richiedente:

- a) spese relative al trasporto delle persone nel proprio territorio, alla loro permanenza e al loro rientro, nei casi previsti dagli articoli 15 e 17 del presente Trattato, nonché altri compensi da corrispondere alle medesime persone;
- b) rimborsi e onorari spettanti ai periti;
- c) spese relative al trasporto, permanenza e presenza dei rappresentanti di autorità competenti della Parte Richiedente durante l'esecuzione della richiesta, nei casi previsti dal paragrafo 3 dell'Articolo 10 del presente Trattato;



d) spese relative all'invio ed alla restituzione di oggetti trasferiti dal territorio della Parte Richiesta al territorio della Parte Richiedente;

e) spese relative alla protezione di persone prevista dall'Articolo 18 del presente Trattato.

2. Qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne controllate, le Autorità Centrali delle Parti si consultano per determinare le condizioni alle quali si darà esecuzione alla richiesta, nonché le modalità con cui si sosterranno le spese.

ARTICOLO 22 STRUMENTI PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

1. Le Parti cooperano, inoltre, tramite le seguenti modalità:

a) scambio di esperienze in materia di indagini penali, terrorismo, corruzione, tratta di esseri umani, stupefacenti e sostanze chimiche, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e reati connessi, tra gli altri;

b) scambio di informazioni sulle modifiche introdotte nei propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali nelle materie oggetto del presente strumento;

c) formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali.

2. Per la realizzazione delle attività e degli incontri previsti dal presente Trattato, le Autorità Centrali concordano direttamente la metodologia da utilizzare per ciascuno di essi, nonché la loro durata e il numero dei partecipanti.

3. Le Parti finanziano la cooperazione alla quale si riferisce il presente articolo secondo le proprie disponibilità e quant'altro stabilito nelle loro rispettive legislazioni interne.

ARTICOLO 23 SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI

1. Le autorità competenti possono costituire, di comune accordo, squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una durata limitata, che può essere prorogata di comune accordo, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti.

2. Una squadra investigativa comune può, in particolare, essere costituita quando:

a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che richiedono inchieste difficili e di notevole complessità coinvolgono l'altra Parte;

b) entrambe le Parti conducono indagini su reati che, per le circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata.

3. I componenti della squadra investigativa comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono denominati "membri", mentre i componenti provenienti dall'altra Parte sono denominati "membri distaccati".

4. La composizione della squadra è indicata nell'accordo costitutivo e può comprendere, oltre ai rappresentanti delle autorità competenti, agenti di polizia giudiziaria, periti, medici legali e altri membri ausiliari della giustizia. E' possibile, inoltre, decidere quali persone



diverse dai rappresentanti delle autorità competenti delle due Parti, appartenenti ad organismi internazionali di investigazione e/o di polizia, partecipino alle attività della squadra investigativa comune. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone, a meno che l'accordo non stabilisca altrimenti in modo chiaro.

5. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune contiene una proposte in merito alla composizione della squadra e alle modalità di svolgimento delle attività investigative, nonché le indicazioni stabilite dall'Articolo 5 del presente Trattato, per quanto applicabili.

6. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti, secondo le decisioni concordate tra le rispettive autorità competenti, tenendo conto delle seguenti condizioni generali:

- a) la squadra esercita la propria attività nel rispetto del diritto della Parte nel cui territorio interviene.
- b) l'autorità pertinente della Parte nel cui territorio la squadra interviene assicura e stabilisce le condizioni necessarie per l'esecuzione delle attività concordate, designando inoltre, tra i componenti della squadra, il responsabile della direzione della stessa;
- c) il responsabile della squadra opera entro i limiti di sua competenza in conformità al diritto nazionale e coordina le attività nel rispetto delle regole stabilite dalle autorità competenti nell'accordo costitutivo della squadra;
- d) i membri distaccati della squadra investigativa comune:
 - (i) devono essere autorizzati, dalla Autorità Centrale della Parte nel cui territorio la squadra interviene, a entrare e rimanere per il tempo stabilito nel territorio di tale Parte prima dell'inizio delle indagini;
 - (ii) hanno il permesso di essere presenti nel territorio della Parte in cui la squadra interviene quando sono adottate misure investigative;
 - (iii) possono, in conformità alla legislazione della Parte Richiesta, dare esecuzione alle misure specifiche di indagine assegnate dal responsabile della squadra, laddove sia previsto dall'accordo costitutivo o previa autorizzazione delle autorità competenti delle Parti;
 - (iv) possono, in conformità al proprio diritto nazionale e nel limite delle loro competenze, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella Parte che li ha distaccati, ai fini delle indagini effettuate dalla squadra stessa;
 - (v) possono richiedere l'adozione di misure, eventualmente considerate necessarie dal responsabile della squadra, direttamente alle loro autorità competenti, che le tratteranno secondo le condizioni richieste da una indagine condotta a livello nazionale.

7. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di un paese terzo, le autorità competenti della Parte nel cui territorio la squadra interviene ne possono fare richiesta alle autorità competenti del paese interessato in conformità agli strumenti giuridici internazionali applicabili o, in loro assenza, sulla base della cortesia internazionale.

8. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune, che le autorità pertinenti delle Parti interessate non potrebbero altrimenti acquisire, possono essere utilizzate, oltre che per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra:



a) per il perseguimento di altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio è stata acquisita l'informazione. Detta autorizzazione può essere negata soltanto quando l'uso in questione compromette le indagini penali della predetta Parte o quando quest'ultima può rifiutare l'assistenza giudiziaria;

b) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto precedente.

9. Gli atti e i documenti acquisiti in applicazione del presente articolo sono assimilati a quelli acquisiti dalla Parte Richiedente in esecuzione di una richiesta di assistenza avviata nell'ambito del presente Trattato.

10. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le seguenti:

a) per la Repubblica Italiana: l'Autorità Giudiziaria procedente;

b) per la Repubblica Dominicana: le autorità competenti del Sistema di Amministrazione della Giustizia.

11. Le autorità competenti devono presentare le richieste di squadre investigative comuni per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell'Articolo 3 del presente Trattato.

ARTICOLO 24 CONSEGNE VIGILATE O CONTROLLATE

1. Ciascuna Parte può effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi necessari per la prova dei reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili.

2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate è adottata in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.

3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformità alle previsioni del presente Trattato, delle convenzioni e trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorità competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione.

4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'Articolo 21.

5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le seguenti:

a) per la Repubblica Italiana: l'Autorità Giudiziaria procedente;

b) per la Repubblica Dominicana: il *Director General de Persecución del Ministerio Público*.

6. Le autorità competenti devono presentare tutte le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell'Articolo 3 del presente Trattato.

ARTICOLO 25 ALTRI STRUMENTI DI COOPERAZIONE

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.



ARTICOLO 26
CONSULTAZIONI E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE

1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, avviano consultazioni sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza.
2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte tramite negoziati diplomatici diretti.

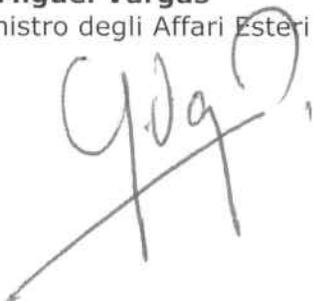
ARTICOLO 27
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Trattato può essere modificato per mutuo consenso delle Parti e le modifiche concordate entreranno in vigore in conformità al procedimento stabilito nel paragrafo 2 del presente Articolo.
2. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica ricevuta, attraverso la via diplomatica, con la quale le Parti si comunicano il completamento delle procedure previste dalla legislazione interna, necessarie per la sua entrata in vigore.
3. Il presente Trattato cessa i suoi effetti cento ottanta (180) giorni dopo che una delle Parti riceve per via diplomatica la notifica scritta dell'altra Parte sulla sua determinazione in tal senso.
4. La cessazione del presente Trattato non riguarderà l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria ricevute durante il periodo di vigenza.

Sottoscritto a Roma, Italia, il tredici (13) febbraio dell'anno duemiladuecentoventi (2022), in due esemplari in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DOMINICANA

Miguel Vargas
Ministro degli Affari Esteri



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Alfonso Bonafede
Ministro della Giustizia

